

Ecotasa a la francesa: la muerte anunciada de una “fiscalidad verde” al servicio del sector

Francia se erigió como ejemplo en la lucha contra el cambio climático al crear una fiscalidad medioambiental en septiembre de 2009. El impuesto sobre las emisiones de CO₂ debía provocar una disminución en el consumo de energía en los hogares y las empresas. Contrariamente, la tasa medioambiental fue establecida por el jefe del Estado muy lejos de las recomendaciones pero en línea con las tendencias del mercado europeo. Con la creación del impuesto sobre las emisiones de CO₂, el aumento de las tarifas eléctricas y de la tasa CSPE, el Gobierno está pensando más en la supervivencia del ramo nuclear que en la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero.

En materia energética y medioambiental, la Unión Europea se ha fijado unos objetivos mínimos, ya que ambiciosos no son. Sin más lógica que lo bonito de la cifra, pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20%, incrementar la «eficiencia energética» en un 20% y elevar un 20 % el consumo de energías renovables de aquí a... 2020.

Desde 2005, en el marco del sistema de intercambio de derechos de emisión, Bruselas distribuye –gratuitamente– cuotas que permiten liberar CO₂ a la atmósfera. De este modo, las empresas pueden vender o comprar sus cuotas excedentes o deficitarias a un precio fijado por la oferta y la demanda del mercado europeo. Pese a esa flexibilidad, a los sectores del transporte (de mercancías y pasajeros), de la vivienda (calefacción y electricidad) y de la agricultura (abonos y carburantes), así como a todos los emisores de gases de efecto invernadero pequeños y medianos no se les requiere que reduzcan sus emisiones, por lo que pueden contaminar gratuitamente.

Francia, de cuyas emisiones únicamente el 32 % está sometido a las cuotas sobre el mercado europeo,¹ se erigió como ejemplo en la lucha contra el

¹ Informe de la conferencia de expertos y de la mesa redonda sobre la contribución Clima y Energía, presididas por Michel Rocard; <http://www.contributionclimatenergie.fr>.

Paola Orozco-Souël es cofundadora de Cielo, asesoría en energías renovables

cambio climático al crear una fiscalidad medioambiental en septiembre de 2009. Preconizada por la Comisión Rocard (que toma el nombre de su presidente, Michel Rocard, ex primer ministro socialista de 1988 a 1991) y con un gravamen de 32 euros por tonelada de CO₂, el impuesto sobre las emisiones de CO₂ debía hacer que el consumo de energía en los hogares y las empresas disminuyese, y cambiar verdaderamente las costumbres de los franceses. Contrariamente a la opinión de la Comisión, la tasa medioambiental fue establecida por el jefe del Estado en 17 euros por tonelada, muy lejos de las recomendaciones pero en línea con las tendencias del mercado europeo, sujetas a especulaciones que poco tienen que ver con los objetivos climáticos.

Al decidir un precio tan bajo, el presidente quería asegurarse una doble victoria: hacer que los franceses aceptasen un impuesto más, al tiempo que preservaba sus relaciones privilegiadas con la industria. Con una tasa tan baja, las empresas efectivamente no tendrían necesidad de invertir en material no contaminante y en cambio sí que podrían repercutir el aumento del precio de la energía en sus precios de venta. En cuanto a los hogares, existía el riesgo de que, siguiendo esa lógica, estuvieran pagando no sólo su contribución, sino también la de las empresas, por medio de su consumo.

Así, desde el 1 de enero de 2010, el litro de gasolina debía experimentar una subida de 4,11 céntimos de euro, y el de gasóleo de 4,52 céntimos. El fueloil debía subir un 8,3 % y el gas un 6,2 %.² Una vez recaudado, el impuesto sobre las emisiones de CO₂ se redistribuiría a los hogares en forma de desgravación para los contribuyentes o de “cheque verde” para los no imponibles. En cuanto a las empresas, quedarían exoneradas parcial o totalmente del nuevo impuesto. Así, los sectores de la agricultura y la pesca –grandes emisores de CO₂– habían obtenido el reembolso de las tres cuartas partes de la tasa en 2010, una ventaja de la que esperaban beneficiarse también las empresas de transporte por carretera.

Pero, una vez gravadas de este modo las energías fósiles, ¿qué queda en cuanto a medios de producción para satisfacer las crecientes necesidades de la población? En Francia, el 80 % de la electricidad consumida procede de la energía nuclear. Como la ecotasa no se aplica a la electricidad, el ramo nuclear hubiera sido el sector más favorecido por dichas medidas.

Y es que los franceses si convertían su calefacción y su vehículo, grandes emisores de CO₂, a energía eléctrica tenían la posibilidad de librarse del pago de la ecotasa. De hecho, el presidente anunciaba un «super-bonus de 5.000 euros» para la compra de un vehículo completamente eléctrico, que había sacado a la venta desde principios de 2010 el grupo Bolloré, que tiene vínculos sobradamente conocidos con... el señor Sarkozy.

² «Los momentos clave y los actores del año», *Le Monde, Bilan Planète 2009*, noviembre de 2009.

Desde julio de 2008, los mensajes del Elíseo confirmaban esas intenciones. Al anunciar la construcción de otra central nuclear EPR (European Pressurised water Reactor), el jefe del Estado ya afirmaba que «la energía nuclear es ahora más que nunca una industria de futuro y una energía indispensable», aunque cara y peligrosa (la nueva central tiene un coste más elevado de lo previsto y se han denunciado graves problemas de seguridad), y también produce incontables residuos para convertir tan sólo el 33 % de la energía disponible en electricidad.

La potencia térmica restante se despilfarra y se arroja voluntariamente al aire, a los ríos o al mar, y eso cuando no hay escapes de cantidades más importantes relacionados con accidentes, como la fuga de uranio en Tricastin, que contaminó los ríos Gaffière y Auzon en el verano de 2008.

Todas estas medidas están destinadas, sobre todo, a relanzar el sector nuclear francés, que teme más que nunca el desarrollo de las energías renovables en el país

Quedando exenta del impuesto sobre las emisiones de CO₂, la electricidad así favorecida constituía una fuente de beneficios para los proveedores, listos para aumentar sus precios. La empresa pública Electricité de France (EDF) confirmaba esos temores cuando, en el verano de 2009, aumentó un 1,9 % la tarifa azul, un 4 % la tarifa amarilla y un 5% la tarifa verde. Después le tocó el turno a la subida del precio del gas, un 9,7% en abril de 2010, y luego de nuevo la electricidad, en agosto del mismo año: 3% para los particulares y 4%, 4,5% y 5% para las pequeñas, medianas y grandes empresas respectivamente.

Con estos aumentos y con la adopción en 2010 de la ley NOME relativa a la liberalización del mercado de la electricidad, el Gobierno le estaba plantando cara, sin decirlo, al persistente desfase entre el coste oficial de la electricidad nuclear y su coste real, voluntariamente subestimado, puesto que no incluía los costes externos relativos a accidentes, residuos radiactivos, investigación, amortización de las centrales, seguridad de los emplazamientos e inversiones de riesgo de las provisiones destinadas a su desmantelamiento.³ Hoy por hoy, se necesitan 35.000 millones de euros para prolongar 10 años la vida del parque nuclear francés en envejecimiento, según EDF. Y para cubrir esa nueva inversión en energía atómica, el gobierno grava las energías fósiles y mantiene un aumento creciente de las tarifas, también para los consumidores más modestos, ya afectados por la precariedad energética.⁴

³ Según sus documentos de referencia de 2008, EDF y Areva perdieron en bolsa en un año un 14% y un 28% respectivamente de las provisiones destinadas al desmantelamiento de sus centrales nucleares.

⁴ El 13% de las familias francesas se encuentra en situación de precariedad energética, según el informe del Ministerio de Ecología, Energía, Desarrollo Sostenible y del Mar, enero de 2010.

Pero otra subida ha venido a sostener el ramo nuclear francés y a frenar, al mismo tiempo, el desarrollo de energías renovables en el país. Una enmienda a la ley presupuestaria instauraba para 2011 el aumento de la contribución para el servicio público de electricidad (CSPE) «con el fin de cubrir los crecientes gastos ligados a las energías renovables». La CSPE, una tasa única pagada por el consumidor de electricidad, permite pagar unos cuantos costes adicionales, como: la financiación de la producción de electricidad a partir de la cogeneración de gas; la perecuación de las tarifas (es decir, el hecho de que los consumidores de los Departamentos de Ultramar paguen la misma tarifa que los consumidores metropolitanos, pese a que el coste de producción de la electricidad sea más elevado); la financiación de las energías renovables eléctricas mediante un contrato de obligación de compra con tarifas de compra fijados por el Gobierno.

La Comisión de Regulación de la Energía (CRE) recomendaba así, según Enerpresse, un nivel de CSPE para 2011 cercano a los 13 euros por MWH, frente a los 4,5 actuales. Pero la propia CRE recuerda que para 2010, la financiación de las energías renovables representa un 24% (es decir, 6,3 euros por hogar y año) de la tasa, mientras que la cogeneración de gas representa el 32% y la perecuación de las tarifas el 41%.

Por consiguiente, parecería que las subidas de las tarifas eléctricas no estén destinadas a permitir a Francia alcanzar los objetivos del 23% de energías renovables en 2020, sino, muy al contrario, a reflotar a EDF y salvar su pérdida de beneficios después de sus inversiones en Constellation en Estados Unidos, la financiación del fiasco que representa el EPR (costes y plazos superados con creces) y el coste de los trabajos necesarios para la prolongación de la duración de vida de las centrales.

Al culpar del aumento de la tasa CSPE a las energías renovables, el Gobierno provoca voluntariamente un rechazo de la población hacia ese tipo de energía, después de haber truncado conscientemente el impulso del desarrollo del ramo eólico en Francia, y de haber atacado con más eficacia al ramo solar fotovoltaico mediante la reducción de los beneficios fiscales y las sucesivas y cuantiosas bajadas de la tarifa de retribución fotovoltaica hasta su suspensión en diciembre de 2010. Porque todas estas medidas están destinadas, sobre todo, a relanzar el sector nuclear francés, que teme más que nunca el desarrollo de las energías renovables en el país. Y es que si los ramos solar y eólico se desarrollan, llegarán a ser muy competitivos para 2020, fecha en la que habrá que reemplazar los reactores nucleares existentes. Y si Francia produce una energía propia y competitiva, es de prever que uno de cada cuatro reactores no sea renovado. Esto equivaldría a una pérdida de beneficios para la industria nuclear, que se emplea a fondo para frenar el despunte, no obstante evidente, de las energías renovables.

Con la creación del impuesto sobre las emisiones de CO₂, el aumento de las tarifas eléctricas y de la CSPE, el Gobierno está pensando más en la supervivencia del ramo nuclear

que en la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero.⁵ El 29 de diciembre de 2009, el Consejo Constitucional, llamado a pronunciarse sobre la validez de semejante imposición, decidió anular dicho impuesto sobre el CO₂, considerando que la Ley, que contenía demasiadas exenciones (la tasa a 17 euros, la exclusión de la electricidad, los reembolsos y exoneraciones a las empresas, etc.) era «contraria al objetivo de lucha contra el calentamiento climático» y creaba una «desigualdad frente al impuesto».

A pesar de esa declaración, el Gobierno, a la caza del electorado ecologista, prometía reajustes de la ley y su entrada en vigor en julio de 2010. Pero después del batacazo electoral del UMP en las elecciones regionales (marzo de 2010), Nicolas Sarkozy contemporizaba sobre el impuesto sobre el CO₂ y, en nombre de la «prudencia», proponía una «acción europea» previa a la acción francesa.

Para gran alivio de la patronal francesa (Medef) y gran frustración de los ecologistas, a finales de marzo de 2010 el jefe del Estado suspendió la instauración de la fiscalidad medioambiental. Por motivo, según afirmaba, de que el impuesto sobre las emisiones de CO₂ podía «incrementar el déficit de competitividad de Francia»; para después añadir que, en lo referente a protección del medio ambiente, «un exceso de Grenelle acabaría con el Grenelle».⁶

⁵ En periodos de mucho frío, Francia debe echar mano de las instalaciones clásicas de gas, fueloil o carbón, o incluso importar masivamente electricidad de centrales que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero.

⁶ El «Grenelle del Medio Ambiente» francés es un proceso, iniciado en 2007 por la Conferencia Medioambiental de Grenelle, en el que varios Grupos de Trabajo proponen soluciones concretas a problemas medioambientales y de desarrollo sostenible, y del que se han derivado las leyes Grenelle.